

# CONGRESO NACIONAL

## CAMARA DE DIPUTADOS

NUM. 37.

Sesion del 12 de Agosto de 1863.

PRESIDENCIA DEL S. URIBURU.

**Orden del dia—Discusion del segundo proyecto sobre Justicia Federal.**

residente.  
Ibarrollos  
Leina  
Guirre  
Augier  
Gote  
Ledoya  
Blanco  
Labral  
Bautilo  
Fvit  
Castro  
Elizalde  
Farcia [D. J. A.]  
Farcia [D. P.]  
Forostiaga (D. L.)  
Futierrez  
Barra  
Garzabal  
Lezama  
Moreno  
Montes de Oca  
Moscoso  
Martinez  
Obligado (D. P.)  
Obligado (D. A. G.)  
Ortiz  
Padilla  
Pizarro  
Quintana (D. J.)  
Torrent  
Villanueva  
Zavaleta  
Zuñiga  
Zavalía

CON AVISO.  
Forostiaga (D. B.)  
Frahel  
Fármol  
Campo  
Orfio  
Ruiz Moreno  
Rojo  
Relez  
Sarmiento

SIN AVISO.  
Del Rio.

En Buenos Aires á doce de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres reunidos en su Sala de sesiones los señores Diputados [al márjen con asistencia del señor Ministro de Justicia, el señor Presidente proclamó abierta la sesion. Leida, aprobada y firmada el acta de la anterior, se anunció que la Comision de Hacienda habia despachado los proyectos sobre amortizacion del papel moneda de Corrientes y sobre el pago de una cantidad al señor Rushwey y Ca. por efectos sustraídos de los almacenes de Aduana del Rosario que la de Peticiones se habia espedido en la solicitud de la vinda de Guesalaga y la de Negocios Constitucionales en el proyecto de ciudadanía: se mandó imprimir y repartir.

Se dió cuenta de dos solicitudes una de D. Dionisio Caviedes, pidiendo jubilacion y otra de D. Gerónimo Uzal pidiendo el pago de unas cabezas de ganado: se destinó á la Comision de Peticiones.

Se leyeron dos proyectos remitidos por el Senado uno celebrando un contrato para el establecimiento de locomotoras Sinfines y otro declarando la verdadera fecha de

1º de la sancionada el 28 de Agosto del año anterior.

*Sr. Torrent*—Haria mocion para que este asunto se tratara sobre tablas, porque es muy sencillo; y es de necesidad fijar la verdadera fecha de esa ley.

*Sr. Presidente*—Se votará si se ha de considerar sobre tablas.

[Se votó y resultó afirmativa jeneral.]

Se tomará en consideracion despues de dar cuenta de los asuntos entrados.

(Así se hizo leyéndose en seguida el proyecto remitido por el Senado.)

Se votará si se aprueba en jeneral el proyecto que acaba de leerse.

[Se votó y resultó aprobado por afirmativa jeneral.]

*Sr. Ruiz Moreno*—Yo no sé si esta fecha se ha puesto por error de cópia solamente.

*Sr. Torrent*—Aunque no estoy autorizado por ningun título para informar, voy á decir lo que hay á este respecto. En el Senado se ha iniciado esta discusion y se ha observado la existencia del error por las actas del Senado, por donde consta que se puso esta fecha por un error de cópia. Entonces se trasmitió á la Cámara de Diputados esta ley y así pasó porque nadie lo advirtió; pero la verificacion se ha hecho por medio de las actas del Senado donde tuvo orijen la ley.

Se votó el proyecto en particular y fué aprobado por afirmativa jeneral quedando sancionado como sigue:

la ley á que se refiere el inciso 4º del artículo

*El Senado y Cámara de Diputados.*

Art. 1.º Declárase que la fecha "primero de Febrero de mil ochocientos sesenta," designada por error de copia en el inciso 4.º del artículo 1.º de la ley sancionada por el Congreso, en 28 de Agosto del año anterior, reglamentando la distribución de las rentas nacionales, ha debido ser *primero de Febrero de mil ochocientos sesenta y uno*.

Art. 2.º Comuníquese al P. E.

En seguida se pasó á la orden del día con la lectura del título 10 del proyecto número 2.

*Sr. Alsina*—Para mí este título es el mas precioso de todo el proyecto, y por cierto que si él se cumple tendríamos derecho para esperar la mejor moralidad en los empleados de la administración; pero yo creo que se notan varias desproporciones en las penas.

Por ejemplo, yo creo que en los casos de los artículos 72, 82 y 83, debían ser castigados con iguales penas. Desearía saber la opinion del Sr. miembro informante de la Comisión ó de cualquiera otro á este respecto. En el primer caso se impone la pena de 5 á 10 años de presidio; y en los artículos 72 y 82, el empleado nacional que se concertara con los particulares, será castigados con trabajos forzados de 3 á 10 años. Yo creo que debe ser la misma pena establecida en el artículo 83 que dice: (leyó). Los delitos son exactamente iguales, mientras que hay una desproporcion notable en las penas; yo creo que en los tres casos debía aplicarse la pena de presidio de 5 á 10 años.

*Sr. Zavaleta*—El artículo á que se refiere el Sr. Diputado es el 82?

*Sr. Alsina*—El 82 y el 83.

*Sr. Zavaleta*—Pero creo que son cosas bastante diferentes, es decir, que hay diferencia entre la falta del empleado que se establece en el artículo 78 que dice que todo empleado en el órden administrativo ó judicial que reciba dinero ó cualquiera otra dádiva faltando á su deber, será castigado con tal pena. No es lo mismo el delito que comete un empleado que recibe una dádiva para faltar á su deber, que el delito que comete el empleado que esté directa ó indirectamente interesado en cualquiera clase de contrato, porque el contrato podría ser bien celebrado, sin defraudar los intereses de la Nación. Por consiguiente es una cosa distinta del caso anterior.

*Sr. Alsina*—Fijese el Sr. Diputado que la úni-

ca condicion que se exige, es que se concierte con los particulares.

*Sr. Garcia (D. P.)*—Yo creo que hay alguna diferencia, porque en el primer caso hay efectivamente abuso de confianza, y el empleado falta á su deber no desempeñando las obligaciones que le impone su empleo; mientras que en el otro caso, puede decirse que ha intervenido como un tercero, no como empleado.

*Sr. Alsina*—Ahí está el mal, en haber intervenido como un tercero.

*Sr. Garcia (D. P.)*—Eso es el caso del otro artículo. Este es el caso de que se concierte con los que van á contratar con el fisco para defraudar al estado.

*Sr. Alsina*—Está equivocado; en el primer caso se supone que el empleado ha faltado á su deber por dinero.

*Sr. Garcia*—Pero hay mucho mas peligro en que un empleado usando de su oficio, cometa ese delito, porque entonces hay abuso de confianza y debe ser castigado con mas severidad por la misma facilidad que hay para que el empleado cometa ese abuso; mientras que en el caso del art. 82, no es tan fácil.

*Sr. Alsina*—¿Y si un comisario, por ejemplo, se pone de acuerdo con el delincuente?

*Sr. Garcia (D. P.)*—En ese caso no funciona en el carácter de empleado.

*Sr. Alsina*—El Sr. Diputado confunde la calidad de tercero con el carácter de empleado; vea el art. 82 que dice: [Leyó]. Es mas grave todavia esto, señor.

*Sr. Garcia (D. P.)*—Ya vé el Sr. Diputado que en ese caso tiene que ponerse de acuerdo con el contratista para cometer el abuso, mientras que en el otro caso procede solo. Entonces, usando de su oficio netamente, vá á defraudar al fisco.

*Sr. Alsina*—Vea lo que dice el art. 83.

*Sr. Moreno*—Estoy de acuerdo con la indicacion del Sr. Diputado por Buenos Aires; no encuentro razon en la diferencia á que han apelado los señores de la Comisión para defender los incisos. Si es cierto que hay una diferencia en la determinacion de los otros artículos, es diferencia de casos; pero no en cuanto á la gravedad del delito. Nuestra legislacion por regla jeneral, siempre ha impuesto penas severísimas contra todo empleado que trate ó contrate, ó que haga algun jénero de negocios con los intereses que administra. Es tambien castigado con penas

severas el tutor que haga negocios con los bienes que administra. Un comisario, por ejemplo, á quien el estado le ha entregado algunos intereses, podria hacer algun negocio con el dinero del estado. Este es un delito que se considera muy grave, porque es un crimen abusar en estos casos de la buena fé que ha depositado en él el gobierno ó el Estado; porque si comercia con estos intereses hay el peligro de que los distraiga en favor de sí mismo. Hay presuncion de que distraeria los intereses en el mero hecho de hacer negocio con los intereses del Estado, porque claro es que se ha de hacer el negocio para utilizar. Por consiguiente opino como el Sr. Diputado por Buenos Aires, es decir, porque debe imponerse la misma pena del art. 72 á fin de evitar todo lo que nuestra lejislacion ha querido evitar, es decir, el peligro de defraudar los intereses del Estado por los mismos que los administran.

*Sr. Zavaleta*—Debo hacer notar que el artículo 82 trata de un delito muy grave, cual es el robo de los intereses fiscales. Por eso es diferente la pena de la del art. 72.

*Sr. Cabral*—Yo tambien creo, Sr. Presidente que la observacion hecha por el Sr. Diputado por Buenos Aires es perfectamente fundada; los dos casos son bien graves, tanto el del art. 72 como el del art. 82.

*Sr. Alsina*—Voy á interrumpir al Sr. Diputado para decirle que estaba equivocado. Yo creia que el art. 72 imponia la pena de presidio de 5 á 10 años, y es la inhabilitacion; de manera que habiendo esa desigualdad, me conformo.

*Sr. Cabral*—En el mismo error estaba yo.

*Sr. Torrent*—El Sr. Diputado por Tucuman ha hecho notar perfectamente la diferencia.

*Sr. Alsina*—Al principio sostenia lo contrario.

*Sr. Zavaleta*—Es que habia tomado la numeracion de los artículos de la Comision.

*Sr. Alsina*—Yo me referia al Sr. García que es tambien Diputado por Tucuman.

*Sr. Zuveria*—Concretándome al primer artículo de que ha hablado al Sr. Diputado Alsina, lo encuentro algo contradictorio, y sobre todo muy confuso, y desearia que la Comision me explicase si no es así: (Leyó). Ya antes dice la pena que tiene, y ahora insiste nuevamente. Yo creo que hay contradiccion.

*Sr. Elizalde*—En este último caso, es cuando se le dá para faltar al cumplimiento de su deber. Es decir que el empleado que recibe dinero, aun

cuando cumpliendo con su deber, tiene una pena; y cuando lo recibe faltando á su deber tiene una pena mayor.

*Sr. Zuveria*—Yo no comprendia que ese era el sentido del inciso.

Se votó el título, y fué aprobado por afirmativa jeneral, quedando el proyecto sancionado así:

## **Proyecto de ley para el castigo de algunos crímenes contra la Nacion Argentina.**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

### **TÍTULO I.**

#### **DE LA TRAICION.**

Art. 1.º Todo individuo argentino, ó persona que deba obediencia á la Nacion Argentina, comete el delito de traicion definido por el artículo 108 de la Constitucion jeneral, ejecutando cualquiera de los siguientes hechos:

1.º Provocando á una potencia extranjera á declarar la guerra á la argentina.

2.º Tomando las armas contra ésta bajo las banderas enemigas.

3.º Facilitando ó procurando facilitar al enemigo la entrada en el territorio nacional, el progreso de sus armas, ó la toma de una plaza, puerto militar, buque del Estado ó almacen de municiones de boca ó guerra.

4.º Suministrando voluntariamente á las tropas enemigas, caudales, armas, embarcaciones, efectos ó municiones, ú otros medios directos para hostilizar á la Nacion.

5.º Reclutando y levantando jente dentro del territorio nacional para el servicio de una potencia enemiga; seduciendo las tropas de la Nacion para engrosar las filas enemigas, ó informando á los jefes enemigos con planos y noticias conducentes á facilitar las hostilidades.

6.º Impidiendo que las tropas nacionales reciban en tiempo de guerra los auxilios y noticias indicados en los incisos 3.º y 4.º

Art. 2.º Los autores ó cabezas principales de la traicion, y los funcionarios públicos de un órden superior, Jefes del ejército ó de la Guardia Nacional que la hubiesen apoyado ó sostenido, serán castigados con la pena ordinaria de muerte.

Los oficiales subalternos y los empleados inferiores sufrirán la pena de trabajos forzados desde cinco hasta diez años.

Lo soldados y los meros ejecutores, la de trabajos forzados por dos á cinco años. Estos y los comprendidos en la anterior clasificacion queda-

rán además inhabilitados perpétuamente, para obtener puestos públicos.

Art. 3.º La conspiracion de dos ó mas personas para los delitos expresados en el artículo 1.º; si fuese descubierta antes de darse principio á la ejecucion, se castigará con trabajos forzados.

En los individuos comprendidos en la primera clasificacion, del artículo 2.º de cuatro á ocho años.

En los de la segunda clasificacion, de dos á cuatro años.

En los de la tercera, de uno á dos años, y con la inhabilitacion perpétua para cargos públicos.

Art. 4.º Quedará eximido de toda pena el que revelase la conspiracion á la autoridad pública antes de haber comenzado el procedimiento.

## TITULO II.

DE LOS DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ Y LA DIGNIDAD DE LA NACION.

Art. 5.º Todo el que ejecutare ó mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos de la Corte pontificia, de aquellos que para su ejecucion necesitan del pase del gobierno, sin haberlo obtenido, quedará sujeto á la pena de uno á cuatro años de estrañamiento; y todo aquel que lo ejecutare ó mandare ejecutar á pesar de haberle sido negado ese pase, quedará sujeto á la de 4 á 8 años de estrañamiento.

Art. 6.º El que cometiere el delito de que se trata en el artículo precedente fuere empleado de la Nacion, quedará inhabilitado por tres á seis años para desempeñar cargos públicos.

Art. 7.º Si el que por actos hostiles no aprobados por el gobierno diere motivo á una declaracion de guerra contra la Nacion, ó espusiese á los ciudadanos á experimentar vejaciones ó represalias en sus personas ó en sus bienes, será condenado á dar una satisfaccion pública, á trabajos de uno á tres años, ó á sufrir la pena de la violencia cometida, si fuere mayor.

Si por efecto de dichas hostilidades resultase la guerra será castigado con trabajos forzados de cinco á diez años.

Art. 8.º Se impondrá la pena de prision, de seis meses á dos años, ó una multa de trescientos á mil pesos fuertes, ó una y otra juntamente, al que violase los tratados lejitimamente concluidos con naciones extranjeras, las treguas ó armisticios acordados con la potencia enemiga, ó sea entre las fuerzas beligerantes de mar ó de tierra, y los salvo-conductos de los que las manden.

Art. 9.º El que violase la inmunidad personal ó el domicilio de los embajadores ú otros ministros de las potencias extranjeras, será castigado con prision de seis meses á dos años.

Art. 10. Los Ministros de Justicia ó cualesquiera funcionarios públicos que violasen los derechos, prerogativas ó inmunidad real ó personal de los embajadores, ó ministros representantes de las potencias extranjeras, ó de sus casas, familias ó comitiva, serán condenados á dar satisfaccion pública ó privada, segun haya sido la violacion, y suspensos de empleo y sueldo por uno á tres años.

## TITULO III.

### DE LA PIRATERIA.

Art. 11. Se comete piratería:

1.º Practicando en el mar ó en los rios de la República algun acto de depredacion contra argentinos, ó súbditos de otra nacion que no se halle en guerra con la argentina.

2.º Cuando abusando de la patente de corso lejitimamente concedida, se practicase algun acto de depredacion ó cualquiera hostilidad contra los buques de la República, ó de otra nacion contra la que no se hubiese recibido autorizacion para hostilizar.

3.º Apoderándose de algun buque, ó de lo que pertenece á su equipaje, por medio de fraude ó de violencia cometida contra su comandante.

4.º Entregando un buque á los piratas, ó lo que pertenece á su tripulacion.

5.º Oponiéndose con amenazas ó con violencias á que el comandante ó la tripulacion defiendan el buque atacado por piratas.

6.º Navegando armada cualquiera embarcacion sin pasaporte, sin matrícula del equipaje, ú otro documento que pruebe la lejitimidad de su viaje.

7.º Traficando el argentino ó el extranjero residente en la República, con piratas conocidos, suministrándoles cualquier auxilio, ó manteniendo intolijencia con ellos.

8.º Navegando un comandante de buque armado, con dos ó mas patentes de diversas potencias.

Art. 12 Los que cometan el crimen de piratería de cualquiera de los modos expresados en los incisos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del artículo precedente, serán condenados á la pena de trabajos forzados por ocho años.

El comandante de un buque que se halle com-

prendido en el inciso 6.º, sufrirá de dos á seis años de trabajos públicos, y su tripulacion de uno á cuatro años de la misma pena.

Los que incurrieren en los casos de los incisos 7.º y 8.º, serán condenados á los mismos trabajos por el tiempo de dos á ocho años.

Art. 13. Incurrirán en la pena de muerte, ó la de trabajos forzados por diez años, los que cometieren el crimen de piratería.

1.º Siempre que hubiesen apresado alguna embarcacion al abordaje, ó haciendo fuego sobre ella.

2.º Siempre que el delito fuera acompañado de homicidio, ó de mutilaciones en las personas de los apresados.

3.º Siempre que fuese acompañado de violacion, estupro ú otros atentados graves contra la honestidad.

4.º Siempre que los piratas hayan abandonado algunas personas sin medios de salvarse.

5.º En todo caso el patron ó capitán pirata, sufrirá la pena primeramente indicada.

#### TITULO IV.

#### DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACION.

##### *Rebellion.*

Art. 14. Son reos de rebellion los que se alzan públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno Nacional, para cualquiera de los objetos siguientes:

1.º Para destruir la Constitucion jurada por la Nacion, y cambiar la forma de gobierno.

2.º Para deponer al Presidente de la Nacion, despojándolo de su autoridad constitucional, ó para arrancarle alguna medida ó concesion, ó para impedir la trasmision de la misma autoridad en los términos y formas establecidas en la Constitucion.

3.º Para impedir las elecciones de Diputados y Senadores Nacionales, ó para estorbar las reuniones lejitimas del Congreso.

4.º Para disolver el Congreso, ó impedir las deliberaciones y funciones de los poderes colegisladores, ó arrancarles alguna resolucion violando el recinto de sus sesiones.

Ar. 15 Los que induciendo y determinando á los rebeldes hubieren promovido ó sostuvieron la rebellion, y los caudillos principales de esta, sufrirán la pena de estrañamiento por diez años; pero si fueren personas constituidas actualmente en autoridad, ó que la hubieren obtenido duran-

te la rebellion; si hubiere habido combate entre los rebeldes, con la fuerza fiel al gobierno ó entre unos ciudadanos con otros: ó si hubieren causado estragos que hayan puesto en peligro la vida de las personas; si sacasen jente por medios violentos, exigieren contribuciones ó distrajeren los caudales públicos de su lejitima inversion, será ademas cada uno de ellos condenado á pagar una multa que no baje de dos mil, ni esceda de seis mil pesos fuertes.

Art 16. Los que ejercieren un mando subalterno en la rebellion, serán desterrados por cuatro ó seis años; ó pagarán una multa de mil á tres mil peses fuertes, ó una y otra pena juntamente.

Art. 17. Los meros ejecutores serán destinados al servicio militar de las fronteras por dos á cuatro años, ó pagarán una multa de trescientos á seiscientos pesos fuertes.

Art. 18. Los que se hayan hecho reos de crímenes particulares durante la rebellion, ó con ocasion de ella, serán castigados con la pena mayor que corresponda á estos delitos.

#### TITULO V.

#### DE LA SEDICION.

Art. 19. Hay sedicion cuando una provincia se alza en armas contra otra por cualquiera causa ó motivo y la invade sin espresa autorizacion del Gobierno Nacional, ó cuando permite que bandas armadas salgan de su territorio para invadir al de otra provincia con el objeto de hacer prevalecer los partidos en que se hubieren afiliado.

Art. 20. Son ademas reos de sedicion los que se alzan públicamente:

1.º Para impedir la promulgacion ó ejecucion de las leyes del Congreso, ó la libre celebracion de las elecciones populares, para los nombramientos nacionales en los comicios, ó juntas electorales que tengan lugar en alguna localidad.

2.º Para impedir á cualquiera autoridad nacional el libre ejercicio de sus funciones, y la ejecucion y cumplimiento de las providencias administrativas ó judiciales en alguna provincia.

Art. 21. Los que induciendo y determinando á los sediciosos hubieren promovido ó sostuvieron la sedicion, y los caudillos principales de esta, serán castigados con la pena de estrañamiento por seis años; pero si fueran personas que ejercieren autoridad ó se hubieren apoderado de caudales ú otros bienes públicos ó particula-

res, ó hubiere habido combate entre los ciudadanos, ó acompañare al crimen cualquiera otra de las circunstancias numeradas como agravantes en el artículo 15, pagará además cada uno de ellos una multa de mil á tres mil pesos fuertes, que en los casos del artículo 19, se destinará á favor de la provincia.

Art. 22. Los que ejercieron un mando subalterno en la sedicion serán desterrados por dos á cuatro años ó condenados á pagar una multa de quinientos á mil quinientos pesos fuertes aplicables á la nacion ó la provincia invadida, segun los casos.

Art. 23. Los meros ejecutores serán destinados al servicio militar de las fronteras por dos años, ó pagarán una multa de trescientos pesos aplicables á la nacion ó á la provincia invadida.

Art. 24. Los delitos particulares cometidos en la sedicion ó con motivo de ella, serán castigados con la mayor pena que les corresponda por las leyes respectivas.

Art. 25. No se reputará sedicion la reunion de una poblacion, ó de un número cualquiera de ciudadanos desarmados, ó en orden, sin pretensiones de atribuirse la soberanía del pueblo, celebrada con el objeto de reclamar contra las injusticias, vejaciones, y mal comportamiento de los empleados de la Nacion.

#### DISPOSICIONES COMUNES Á LOS DOS TITULOS ANTERIORES.

Art. 26. Luego que se manifieste la rebelion ó la sedicion, la autoridad nacional mas inmediata intimará hasta dos veces á los sublevados que desde luego se disuelvan y retiren dejando pasar entre una y otra intimacion el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiran inmediatamente despues de la segunda intimacion, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos.

Las intimaciones se harán á toque de tambor ú otro instrumento apropiado.

No serán necesarias respectivamente la primera y segunda intimacion, desde el momento que los sublevados hagan uso de las armas.

Art. 27. Los que sedujeren tropas para cometer el delito de rebelion, sufrirán la pena de trabajos forzados por el tiempo de dos á cuatro años; y los que los sedujeren para la sedicion, destierro de dos á cuatro años.

Art. 28. Si llegáren á tener efecto la rebelion ó la sedicion, los seductores se reputarán promovedores, y respectivamente comprendidos en los

artículos que les conciernen.

Art. 29 Las autoridades de nombramiento directo nacional que no hubiesen resistido la rebelion ó la sedicion por todos los medios que estuvieren á su alcance, perderán sus empleos y quedarán inhabilitados por cinco años para obtener cargos públicos.

### TITULO VI.

#### DE LOS DESACATOS CONTRA LA AUTORIDAD Y OTROS DESÓRDENES PÚBLICOS.

Art. 30 Cometén desacato contra las autoridades.

1.º Los que perturban gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores y los que injurian, insultan, ó amenazan en los mismos actos á algun Diputado ó Senador.

2.º Los que calumnian, insultan ó amenazan á algun Diputado ó Senador por las opiniones manifestadas en las Cámaras.

3.º O á los Ministros del Gobierno Nacional, ó á otras autoridades en el ejercicio de su cargo.

4.º O á un superior con ocasion de sus funciones, y en el acto de ejercerlas.

En todos estos casos la provocacion al duelo aunque sea privada ó embozada, se reputará injuria grave para todos los efectos de este artículo.

Art. 31. Si el desacato consiste en la perturbacion del orden de las sesiones, la pena será la prision de uno á cuatro meses, ó una multa de veinte á cien pesos fuertes ó una y otra juntamente.

Art. 32 Si consistiere en calumnia, ó el insulto de que habla el artículo 30 fuese grave, la pena será la de prision desde dos hasta doce meses, ó una multa de cuarenta á cuatrocientos pesos fuertes, en favor del ofendido, ó una y otra juntamente.

Art. 33. Los que causaren tumultos, ó perturbaren gravemente el orden en las audiencias de la Suprema Corte, en los Tribunales de los jueces de seccion ó en algun comicio electoral para empleados de la nacion, sufrirán de uno á cuatro meses de prision ó una multa de veinte á ochenta pesos fuertes, ó una y otra pena juntamente.

Art. 34. Los que falsificaren en alguna eleccion nacional las listas de votos, leyendo distintos nombres de los que en ellas se encuentran, inscribiendo ó haciendo inscribir otros supuestos, aumentando ó disminuyendo los votos ó los pliegos de listas, serán castigados con prision

por seis meses á tres años, ó con una multa de ciento cincuenta á novecientos pesos fuertes ó con una y otra pena juntamente.

Art. 35. El que se presentare armado en los comicios públicos, ó penetrare armado en un colegio electoral para los nombramientos de empleados nacionales, será castigado con una multa de veinte á cien pesos fuertes, sin perjuicio de las penas en que incurriere por el uso que hiciere de las armas.

Art. 36. El que con violencia ó con fines contrarios á la Constitucion, ó por otro motivo reprobado impidiera á un Senador ó Diputado asistir al Congreso, sufrirá la pena de prision por seis á diez y ocho meses, ó pagará una multa de doscientos á seiscientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 37. El juez ó autoridad que en el arresto ó formacion de causa contra un Senador ó Diputado al Congreso Nacional, no guardare la forma prescrita por la Constitucion, pagará una multa de quinientos á mil pesos fuertes aplicables á los hospitales de la localidad que aquellos representan.

## TÍTULO VII.

### DE LA RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y SOLTURA DE LOS PRESOS.

Art. 38. El que resistiere á un agente de la autoridad nacional que le intimare prision, ó un ciudadano en el caso de flagrante delito, sufrirá la mayor pena que segun las leyes corresponda al hecho que motiva su arresto; y si lo maltratare, hiriere ó matare, se le impondrá ademas la pena mayor de este nuevo delito.

Art. 39. Los que sustrajeran de las manos ó poder de un oficial de justicia, ó de otro empleado público, al que se halle legalmente preso, serán castigados con la pena de trabajos forzados, por uno á tres años, ó con una multa de quinientos á mil quinientos pesos, ó con una y otra juntamente.

Art. 40. Los que libertaren del poder de un ciudadano no investido de autoridad pública á un reo aprehendido en flagrante delito, sufrarán la pena de trabajos forzados desde seis á diez y ocho meses, ó una multa de trescientos á novecientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 41. Los que se introdujeran por fuerza en una cárcel publica y obligasen al alcaide ó encargado de ella á que deje fugarlos presos, serán castigados con trabajos forzados por tres á

seis años. Si tiene efecto la fuga serán castigados con la pena de trabajos forzados por seis á diez años.

Art. 42. Los que facilitaren la fuga de los presos por medio de astucia ó soborno, sufrirán la pena de trabajos forzados por seis meses hasta un año, ó una multa de trescientos á quinientos pesos fuertes; ó una y otra juntamente.

Art. 43. El alcaide ó encargado por la autoridad nacional de la custodia de los presos, que los dejase fugar, si lo hiciere por connivencia, será castigado con trabajos forzados por dos á seis años; si fuere por negligencia, con uno á dos años de la misma pena, ó con una multa de quinientos á mil pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

Art. 44. En todos los casos de los artículos 41 y 42, y en el 1.º del precedente, los culpables responderán mancomunadamente de las condenaciones pecuniarias á que estuvieren ó debieren estar sujetos los fugados por la causa de su sentencia, detencion ó prision.

Art. 45. El que no siendo autoridad competente librase una orden de prision ó arresto, ó aun siéndolo, omitiese expedirla por escrito, será castigado con la pena de prision de 6 á 18 meses, ó con una multa de 300 á 800 pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

Art. 46. El que ejecute una prision ó arresto sin orden escrita de su superior incurrirá en la pena de prision de uno á seis meses, ó de una multa de 50 á 300 pesos.

Art. 47. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes, no tendrá aplicacion en los casos de delito infraganti.

## TÍTULO VIII.

### DE LA INTERCEPTACION Y SUBSTRACCION DE LA CORRESPONDENCIA PUBLICA.

Art. 48. Los que obstruyeran ó retardaren el pasaje de la balija de la correspondencia pública, ya sea trasportada en carruaje ó á caballo, pagarán por cada vez una multa de cincuenta á trescientos pesos fuertes, ó sufrirán la pena de trabajos forzados desde uno á seis meses, ó una y otra juntamente.

Art. 49. Los que con violencia despojen á un conductor de la correspondencia pública de la balija, ó de una parte de ella, sufrirán la pena de trabajos forzados por dos á cuatro años, ó una multa de mil á dos mil pesos fuertes, ó una y otra juntamente.



Art. 50. Los que hirieren á un correo en ejercicio, si las heridas fuesen leves, sufrirán la pena de trabajos forzados por un año, ó una multa de quinientos pesos fuertes ó una y otra; si las heridas fuesen tales que le impidieren continuar el viaje, la pena podrá estenderse hasta cinco años; y si de las heridas resultare la muerte, sufrirán la pena que por las leyes vijentes en la República corresponde á este delito.

Art. 51. Los que hurten la balija ó sustraigan de ella ó de una oficina de correos, alguna carta ó paquete, sufrirán de dos á seis meses de trabajos públicos, ó una multa de cien á trescientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 52. Todo empleado de la Administracion de Correos ó Capitanía del Puerto que detenga, oculte, destruya ó abra una carta dirigida á la Administracion para ser entregada ó conducida perderá su empleo, será destinado á trabajos forzados por dos á seis meses, ó pagará una multa de cien á trescientos pesos, ó sufrirá una y otra pena.

Art. 53. Si la carta detenida ó abierta contuviere billetes de Banco, ó letras de cambio, ó de crédito, ó cualquier otro documento para recibir ó pagar dinero, el empleado que resulte delincuente, quedará inhabilitado para obtener cargos públicos, y sufrirá la pena de trabajos forzados por cinco años.

En la misma pena de trabajos forzados por cinco años, incurrirán los que en los casos de los artículos 49 y 51, despojen al correo, ó hurten la correspondencia de una oficina de la administracion, si ella contuviere los valores expresados en este artículo.

## TÍTULO IX.

DE LA SUBSTRACCION Ó DESTRUCCION DE DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN LAS OFINAS PUBLICAS.

Art. 54. Los que substrajeren, destruyeren ó robaren los procesos ó actuaciones seguidas por ante la justicia Nacional, ú otros papeles, registros, actas y efectos custodiados en los archivos, oficinas ó depósitos públicos, ó entregados á un empleado público como tal, sufrirán la pena de trabajos forzados por uno á tres años, ó una multa de quinientos pesos á mil y quinientos.

Art. 55. Los archiveros, depositarios ó empleados que con su negligencia hubieren dado lugar á la substraccion, robo ó destruccion, perderán sus empleos y pagarán una multa de cien á trescientos pesos fuertes, ó sufrirán una prision

de tres hasta nueve meses, ó una y otra pena juntamente.

Art. 56. Si la substraccion ó destruccion de documentos se hubiere cometido con violencia en las personas ó asalto de los conductores, se castigará con la pena de trabajos forzados desde dos á cuatro años, ó con una multa de mil á dos mil pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

## TÍTULO X.

DE LAS FALSEDADES.

Art. 57. Los que falsifiquen la firma del Presidente de la Nacion ó de sus Ministros de Estado, ó el sello nacional, ó cualesquiera otros sellos usados por cualquiera autoridad ú oficina pública nacional, serán castigados con la pena de trabajos forzados por dos á seis años, ó con una multa de mil á tres mil pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

Art. 58. La falsificacion de las marcas y contraseñas de que se use en las oficinas nacionales para identificar cualquier objeto, ó para asegurar el pago de impuestos, será castigada con la pena de cuatro á doce meses de trabajos forzados ó con una multa de doscientos á quinientos pesos fuertes, ó con una y otra juntamente.

Art. 59. La falsificacion de los sellos, marcas y contraseñas que usen los establecimientos de industria ó de comercio, con objeto de defraudar la renta nacional, será castigada con la pena de trabajos forzados por dos á seis meses, ó con una multa de cien á trescientos pesos, ó con una y otra juntamente.

Art. 60. Los que fabriquen, introduzcan ó espendan moneda falsa de especie que tenga curso legal en la Nacion y sea de un valor inferior á la lejitima, serán castigados con la pena de trabajos forzados desde cuatro hasta siete años, y con una multa de quinientos á cinco mil pesos fuertes, si la moneda fuese de oro ó plata; pero si fuere de cobre aunque su valor no sea inferior al de la lejitima, con la de trabajos forzados por dos ó cuatro años, y multa de cincuenta á quinientos pesos fuertes.

Si la moneda falsa se hubiese recibido en pago de buena fé, y se espendiere con conocimiento de su falsedad, la pena será una multa equivalente al triplo de la suma espendida.

Art. 61. El que cercenare moneda lejitima de oro ó plata, será castigado con uno á dos años de trabajos forzados y una multa de cincuenta á quinientos pesos fuertes. El que espendiere ó



introdujere moneda cercenada incurrirá en las mismas penas.

Si la moneda cercenada se hubiera recibido en pago, de buena fé, y se espendiera con conocimiento de su cercenamiento, la pena será una multa equivalente al triplo de la suma espendida.

Art. 62. El que introdujere ó espendiere falsos títulos de la deuda pública al portador, billetes ó libranzas del Tesoro, inscripciones de deuda ó otro documento de crédito ó valores nacionales, ó de un Banco erijido con autorizacion del Gobierno Nacional, y los que los falsificaren, serán castigados con la pena de trabajos forzados por cuatro á siete años, y con una multa de quinientos á cinco mil pesos fuertes.

Art. 63. El que habiendo adquirido de buena fé los títulos y efectos de que habla el artículo precedente los espendiere despues con conocimiento de la falsedad, será castigado con la multa del tanto al triplo del valor del documento; no pudiendo bajar de cincuenta pesos fuertes.

Art. 64. Será castigado con la pena de trabajos forzados de dos á cuatro años, y multa de cien á mil pesos fuertes, el empleado nacional que abusando de su oficio cometiere falsedad:

1º Contrahaciendo ó fingiendo letra, firma ó rúbrica.

2º Suponiendo en un acto la intervencion de personas que no la han tenido.

3º Atribuyendo á los que han intervenido en él, declaraciones ó manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

4º Faltando á la verdad en la narracion de los hechos.

5º Alterando las fechas verdaderas.

6º Habiendo en documento verdadero cualquier alteracion ó intercalacion que varíe su sentido.

7º Dando cópia en forma fehaciente de un documento supuesto, ó manifestando en ella cosa contraria ó diferente de lo que contenga el orijinal.

8º Ocultando con perjuicio del Estado ó de un particular cualquier documento oficial.

Art. 65. El particular que cometiere en documento público ú oficial ó en el que hubiere presentado ó introducido en las oficinas de la Nacion, ó en letras de cambio ú otra clase de documentos mercantiles, alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, será castigado con la pena de trabajos forzados de uno á

tres años y multa de cien á mil pesos fuertes.

Art. 66. El culpable de falso testimonio en causa criminal sobre delito grave en contra del acusado, será castigado con la pena de cuatro á diez años de trabajos forzados.

Art. 67. En las causas criminales menos graves ó correccionales, el falso testigo contra el acusado sufrirá la pena de trabajos forzados, desde seis meses á dos años.

Art. 68. Si el falso testimonio fuere dado en favor del acusado.

En causa criminal grave, se castigará con trabajos forzados desde dos á cinco años, ó con una multa de mil á dos mil quinientos pesos, ó una y otra juntamente.

En causa correccional con trabajos forzados de tres hasta doce meses, ó con una multa de ciento cincuenta á quinientos pesos fuertes, ó con una y otra pena.

Art. 69. El falso testimonio en causa civil, será castigado con trabajos forzados desde cuatro á diez y ocho meses, ó con una multa de doscientos hasta setecientos pesos fuertes ó con una y otra pena juntamente.

Art. 70. Las penas de los cuatro artículos precedentes serán aplicables á los peritos que declaren falsamente.

Art. 71. Siempre que la declaracion falsa del testigo fuere dada mediante cohecho, las penas serán las del extremo mayor designado, y si el precio ó dádiva se hubieren recibido, será descomisado.

Art. 72. Quando el testigo ó perito, sin faltar sustancialmente á la verdad, la alteren con reticencias ó inexactitudes, las penas serán:

1º Multa de veinte á doscientos pesos fuertes, si la falsedad recayere en causa sobre delito.

2º De diez á cien pesos fuertes, si recayere sobre falta ó negocio civil.

Art. 73. Las acusaciones ó denuncias que hubieren sido declaradas calumniosas por sentencia ejecutoriada, serán castigadas con las penas de los testigos falsos contra el acusado.

Art. 74. Serán castigados como reos de falso testimonio, los que presentaren á sabiendas testigos ó documentos falsos en juicio.

## TÍTULO XI.

DEL COHECHO Y OTROS DELITOS COMETIDOS POR EMPLEADOS Ó CONTRA EL TESORO NACIONAL.

Art. 75. Todo empleado de la Nacion en el órden administrativo ó judicial, agente ó encar-

gado de cualquier ramo de la administracion pública, que recibiere dinero ó cualquier otra dádiva, ó que aceptare una promesa directa ó indirecta para hacer ó dejar hacer alguna cosa, faltando á sus deberes, será castigado con la pérdida del empleo é inhabilitacion por cinco á diez años para obtener otro alguno, y con una multa igual al triple del valor de la dádiva ó promesa: si estas se le hicieren por el cumplimiento de sus deberes, perderá su empleo y pagará el duplo del valor de la gratificacion ó recompensa.

Art. 76 El juez que diere por precio una sentencia, aunque sea justa, incurrirá en las penas del primer inciso del artículo anterior.

Si la sentencia fuere injusta en causa civil, ó siendo en causa criminal, no se impusiere por ella pena corporal, sufrirá ademas la de prision por seis meses á dos años.

Si por la sentencia injusta se impusiere pena corporal, se aplicará al juez la misma, á escepcion de la de muerte, que se conmutará á su respecto en la de trabajos forzados por diez años.

Art. 77 Los árbitros que por precio dieren sentencia injusta sufrirán las penas de inhabilitacion, y multas designadas en el primer inciso del artículo 72.

Art. 78. El que diere ó prometiére las dávidas en los casos de los tres artículos precedentes, será castigado con las mismas penas que el empleado ó árbitro corrompido, á menos que, siendo el soborno en causa criminal en favor del reo, fuese hecho por su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano, ó afín en los mismo grados en cuyo caso solamente se impondrá al sobernante una multa de valor igual al de la dádiva ó promesa.

Art. 79. Todo funcionario público nacional que se constituya deudor ó acreedor de un oficial ó empleado, que le sea superior ó se preste como fiador suyo ó consienta que lo sea por él, ó contraiga con él otras obligaciones pecuniarias, será suspendido en su empleo por tres hasta nueve meses.

La misma pena se aplicará al oficial ó empleado superior que contraiga ó acepte las indicadas obligaciones.

Art. 80. El administrador, recaudador ó receptor, depositario de caudales públicos, y todo el que tuviere obligacion de dar cuentas al Gobierno Nacional, que distrajere, sustrajere ó hurtare los caudales públicos ó privados, los efectos de crédito representativos de esos valores, ó cua-

lesquiera documentos, títulos, actas ó efectos mibiliarios puestos en su poder por razon de su cargo, será castigado con la pena de trabajos forzados por cinco á diez años.

Si el que hurtare los caudales ó valores no fuere empleado encargado de su custodia, sufrirá la misma pena por tres á seis años.

Art. 81. El empleado que sustrajere efectos de los almacenes de aduana, sufrirá la pena de cinco á diez años de trabajos forzados.

Si el culpable no fuere empleado, y tampoco le pertenecieren los efectos, será castigado con tres á seis años de la misma pena.

Y si le pertenecieren los efectos, con el triplo del valor de los derechos que estos adendaron, y con uno á tres años de trabajos forzados, ó con una multa de quinientos á mil quinientos pesos fuertes, ó con una y otra pena juntamente.

Art. 82. El que emplee fraudes por apropiarse dineros públicos, ó que cobre al Gobierno cuentas falsas ó frandulentas, pagará el triplo de lo que se apropiare ó cobrare y sufrirá ademas la pena de trabajos forzados por uno á tres años, ó una multa de quinientos á mil quinientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

Art. 83. El empleado en la administracion que con daño ó entorpecimiento del servicio público, aplicare á usos propios ó ajenos los caudales ó los efectos puestos á su cargo, será castigado con la pérdida del empleo, inhabilitacion por cuatro á seis años para obtener otro, y una multa que no pase de dos mil pesos.

Si no se verificare el reintegro se le aplicará la pena del artículo 80.

Art. 84. Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, incurriera en la pérdida del empleo é inhabilitacion por cuatro años para obtener otro.

Art. 85. El empleado nacional que interviniendo por razon de su cargo en alguna convention de subministros, contratos, ajustes ó liquidaciones de efectos ó haberes públicos, se concertare con los interesados ó especuladores, ó usare de cualesquiera otros arbitrios para defraudar al estado, será castigado con trabajos forzados por tres á seis años é inhabilitacion perpetua para otros empleos públicos.

Art. 86. El empleado nacional que directa ó indirectamente se interesare en cualquier clase de contrato ó operacion en que deba intervenir por razon de su cargo, será castigado con las penas de inhabilitacion para empleos públicos

por dos años á seis, y una multa diez al cincuenta por ciento del valor del interes que hubiere tomado en el negocio; ó si fuere insolvente para el todo ó parte de la multa, sufrirá la pena de prision por un tiempo que no esceda de dos años. Esta disposicion es aplicable á los peritos árbitros y contadores respecto de los bienes ó cosas en cuya tasacion, particion ó adjudicacion se les hubiere mandado intervenir.

Art. 87. El empleado ó funcionario público nacional de cualquier clase que sin estar autorizado competentemente, impusiere una contribucion ó arbitrio, ó hiciere cualquiera otra requisicion con destino al servicio público, será castigado con las penas de privacion del empleo, y multa de cinco al veinte y cinco por ciento de la cantidad exigida, ó siendo insolvente con prision que no pase de dos años.

Cuando la exaccion hubiere sido resistida por el contribuyente como ilegal, y se hiciere efectiva empleando la fuerza pública, las penas serán las de inhabilitacion para cargos públicos por diez años, y multa del diez al cincuenta por ciento, ó siendo insolvente, una prision que no pase de cuatro años.

Art. 88. El empleado que cometiere en provecho propio las exacciones espresadas en el artículo anterior, sufrirá la pena de trabajos forzados por dos á seis años.

Art. 89. El empleado nacional que exijiere directa ó indirectamente mayores derechos ó multas que las que deban pagarse, será castigado con una multa del duplo al cuádruplo de la cantidad cobrada ó exigida, y si fuere insolvente, con prision que no pase de un año.

Art. 90. El que, encargado de hacer pagos por razon de su empleo, exija por si mismo ó por medio de un tercero, ó consienta que otro exija de quien ha de recibirlo, una recompensa, gratificacion, descuento ó derechos no determinados por la ley, perderá su empleo, sufrirá la pena de prision de dos meses á un año, ó una multa de cien á quinientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente.

#### DISPOSICIONES JENERALES.

Art. 91. La reparacion ó indemnizacion de daños y perjuicios, y la restitution de lo adquirido ilejitimamente, se entenderán siempre ordenadas por la presente ley en los casos en que ellas pudieren tener lugar.

Art. 92. Cuando el condenado á pagar una multa que no tuviere otra pena en sustitucion, ó

á sufrir pena corporal y pecuniaria juntamente, no tuviere bienes para satisfacer la última, será destinado á prision ó trabajos forzados, regulándose á un peso fuerte por cada día de prision, y á dos el de trabajos forzados pero sin que puedan esceder en ningun caso estas penas de dos años.

#### DISPOSICION FINAL.

Art. 93. Los delitos contra la nacion no previstos en esta ley, y los comunes cometidos en lugares sujetos á la jurisdiccion nacional, serán castigados con arreglo á los códigos que forman el derecho comun de las provincias con la modificacion en las penas que ha introducido la práctica de los tribunales.

Art. 94. Comuníquese al P. E. /

Se leyó el título 1.º del tercer proyecto.

*Sr. Obligado (D. P.)*—Yo creo que el radio de 6 cuadras que determina el artículo 6.º dentro del cual deben vivir los apoderados ó procuradores, que es muy poco.

*Sr. Garcia (D. P.)*—La comision cree por el contrario que es un radio muy racional. Toda vez que un individuo no pueda fijar su domicilio en el radio de 6 cuadras, tiene que nombrar apoderado.

*Sr. Obligado (D. P.)*—Puede haber dificultad para que los procuradores puedan vivir dentro de las 6 cuadras.

*Sr. Garcia (D. P.)*—El que siga un pleito, tiene que nombrar un apoderado que viva en el radio de 6 cuadras.

*Sr. Obligado (D. P.)*—Esa obligacion de vivir á 6 cuadras, es un poco onerosa, por que todos sabemos lo que valen las casas dentro de un radio de 6 cuadras, puesto que el asiento del tribunal se supone que será en el centro de la poblacion.

*Sr. Garcia (D. P.)*—Tal vez se considere toda ciudad el asiento del tribunal.

*Sr. Obligado (D. P.)*—El asiento del tribunal es la sala.

*Sr. Elizalde*—Parece que se podria poner hasta 10 cuadras.

*Sr. Garcia (D. P.)*—Eso no quiere decir que ha de tener el domicilio precisamente á 6 cuadras, sino que tiene que señalar un local para que se le notifique.

*Sr. Obligado (D. P.)*—Pero eso es poner una traba á la tramitacion de los asuntos.

*Sr. Garcia (D. P.)*—Puede vivir á doce cuadras, y decir que se le notifique en tal punto, á